

CONTESTACIÓN DE DEMANDA R.D. 2020-104 JULIO CESAR ARANGO ECHEVERRI

Oscar Fernando Lopez Gutierrez <oscarf.lopez@fiscalia.gov.co>

Jue 04/03/2021 15:47

Para: Juzgado 03 Administrativo - Valle Del Cauca - Cartago <j03admcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Proc. I Judicial Administrativa 211 <procjudadm211@procuraduria.gov.co>; procuraduria211@yahoo.com

<procuraduria211@yahoo.com>; Apoyo Legal 04 - Cali <galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co>;

oscarbedoyaospina@yahoo.es <oscarbedoyaospina@yahoo.es>

 1 archivos adjuntos (4 MB)

CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE JULIO CESAR ARANGO ECHEVERRI.pdf;

Buenas tardes doctores,

Al presente escrito, me sirvo acompañar, la contestación de la demanda de la acción de reparación directa Nro. 2020-104, demandante JULIO CESAR ARANGO ECHEVERRI.

Atentamente,

OSCAR FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ

Apoderado

Fiscalía General de la Nación

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Señor
JUEZ TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
Cartago

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: JULIO CESAR ARANGO ECHEVERRI Y OTROS
Demandados: LA NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Radicado: 2020-0104
Asunto: Contestación de Demanda

OSCAR FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Armenia, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 80724257 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional 162.113 del C.S.J.; actuando como apoderado de LA NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el respeto que me caracteriza, mediante el presente escrito me permito presentar la contestación a la demanda, en los siguientes términos:

A LAS “PRETENSIONES DE LA DEMANDA”

Por lo anteriormente expuesto, me permito oponerme a la prosperidad de todas y cada una de ellas, por carecer de fundamentos fácticos y legales.

A LOS “HECHOS (FÁCTICOS DE LA DEMANDA)”

- AL 1.-** Es cierto, de acuerdo con los documentos aportados por el demandante.
- AL 2,3 y 4.-** No nos consta, debe probarse conforme a la ley y a la jurisprudencia.
- AL 5.-** Es cierto, de acuerdo con los documentos aportados por el demandante.
- AL 6.-** Es parcialmente cierto, ya que no solo ello fue el fundamento de la acusación.
- AL 7.-** No nos consta, debe probarse conforme a la ley.
- AL 8.-** Es cierto, de acuerdo con los documentos aportados por el demandante.
- AL 9.-** Es cierto, de acuerdo con los documentos aportados por el demandante.
- AL 10.-** No es cierto, esto simplemente es una apreciación errónea de la parte demandante; ya que inicialmente era notoria la gran cantidad de E.M.P. y evidencia física, que existían, y que conllevaron a solicitar y practicar las medidas privativas.
- AL 11.-** No es cierto, esto simplemente es una apreciación errónea de la parte demandante; ya que inicialmente era notoria la gran cantidad de E.M.P. y evidencia física, que existían, y que conllevaron a solicitar y practicar las medidas privativas, conforme a la ley 906 de 2004.

- AL 12.-** No nos consta, debe probarse conforme a la ley.
- AL 13.-** No nos consta, debe probarse conforme a la ley.
- AL 14.-** Es cierto, de acuerdo con los documentos aportados por el demandante.
- AL 15.-** Es cierto, de acuerdo con los documentos aportados por el demandante.
- AL 16.-** Es parcialmente cierto, ya que no solo ello fue el fundamento de la decisión.
- AL 17.-** Es cierto, de acuerdo con los documentos aportados por el demandante.
- AL 18.-** No nos consta, debe probarse conforme a la ley.
- AL 19 y 20.-** No nos consta, son simplemente apreciaciones erróneas de la parte demandante que carecen de fundamento.
- Al 21.-** Es parcialmente cierto, ya que no solo ello fue lo enunciado por los testigos.
- Al 22.-** No es cierto, ya que, entre otros testigos del actuar delictivo, se encontraba a Antonio Villabon.
- Al 23.-** No es cierto, esto simplemente es una apreciación errónea de la parte demandante; ya que inicialmente era notoria la gran cantidad de E.M.P. y evidencia física, que existían, y que conllevaron a solicitar y practicar las medidas privativas, conforme a la ley 906 de 2004.
- Al 24.-** No es un hecho, simplemente es un requisito de procedibilidad, para incoar la presente acción.

Por lo anterior, me permito proponer las siguientes:

EXCEPCIONES

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA:

La parte demandante, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la Acción de Reparación Directa, pretende que se declare administrativamente responsable a LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA, de la privación supuestamente injusta de la libertad del Señor Julio Cesar Arango Echeverri, sin tener en cuenta que en el sub judice NO se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de dicha entidad, puesto que de los hechos narrados en la demanda, se concluye que el actuar de la FGN, fue en aras del cumplimiento de un deber constitucional y legal, al tener que iniciar la investigación penal en la cual se vio involucrado el señor Julio Cesar Arango Echeverri, al ser señalado por testigos como uno de los autores en el homicidio del señor William de Jesus Grajales Rojas.

En este orden de ideas, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, obró en cumplimiento de lo establecido en el artículo 250 de la Constitución Política, donde consagra su obligación de "...adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querrela o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del Juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio."

Continúa enumerando las funciones asignadas al ente investigador:

"1. Solicitar al Juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

El Juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el Juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.

La Ley podrá facultar a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la Ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el Juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

4. Presentar escrito de acusación ante el Juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

5. Solicitar ante el Juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la Ley no hubiere mérito para acusar.

6. Solicitar ante el Juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación a los afectados con el delito.

9. Cumplir las demás funciones que establezca la Ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusación, el fiscal general o sus delegados deberán suministrar, por conducto del Juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que sean favorables al procesado..."

La disposición antes transcrita se encuentra desarrollada tanto en la norma sustancial como procedimental penal, el Estatuto Orgánico de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y demás normas concordantes y procedimentales vigentes para la época de los hechos.

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en este caso preciso, obró de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

Con base en los hechos narrados en la demanda, se vislumbra que la actuación de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se materializó en cumplimiento de un deber constitucional y legal; además, su actuar siempre estuvo ajustado a derecho, de manera que el funcionamiento de la administración de justicia fue correcto.

Los pronunciamientos realizados por la Fiscalía dentro del investigativo penal adelantado contra el Señor Julio Cesar Arango Echeverri, corresponden a la naturaleza del procedimiento, así como a las pruebas aportadas y practicadas dentro del mismo, donde primó la mesura, el respeto a las normas, con sustento en el comportamiento apropiado y diligente de sus funcionarios; que a pesar de la gravedad del delito y de la incautación de tan gran cantidad de Cocaína; de manera diligente realizó todas las labores investigativas, que arrojaron como resultado la solicitud de preclusión de la investigación en comento.

Es así, como se evidencia que el servicio prestado por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a través de sus funcionarios, no presentó falla alguna, puesto que los elementos de juicio y el acervo probatorio recaudado estaban plenamente ajustados a las normas aplicables, situación avalada por el Juzgado de Control de Garantías, al realizar las Audiencias Preliminares de Legalización de Captura del Señor Valencia Amaya e imponerle la Medida de Aseguramiento de Detención Preventiva en establecimiento carcelario, la cual con posterioridad fue revocada.

En casos similares el Tribunal Administrativo de Antioquia ha dicho lo siguiente:

“Ahora bien, no puede exigírsele al funcionario judicial que al momento de analizar la viabilidad de una medida de aseguramiento de detención preventiva, efectúe un juicio de responsabilidad penal para determinar si el procesado es culpable del hecho imputado, por cuanto ello solo es posible en el marco de una sentencia judicial, una vez recaudado todo el acervo probatorio y culminadas las demás etapas procesales, pues unos son los requisitos de la medida de aseguramiento y otros los de la sentencia condenatoria.

Tampoco puede exigírsele al Agente Judicial que en aras de salvaguardar el derecho a la libertad personal, aguarde hasta la comprobación de la autoría del delito, para ordenar la privación de la libertad, por cuanto ello haría nugatorio el deber del Estado de proteger, como autoridad suprema, la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de los particulares, fin primordial que se persigue con la figura de la detención preventiva.
(...)

8. Conforme a lo expuesto, la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se deriva no solo de la ilicitud de medida, sino también de la desproporción o arbitrariedad a la que ve sometido el particular, con la imposición de la misma. Estos

dos conceptos, a la luz de la jurisprudencia, encierran el carácter injusto de la privación de la libertad de que trata el artículo 68 de la Ley 270 de 1991.

(...)

10. De conformidad con lo anterior, se concluye que en los eventos en que la privación de la libertad ha culminado con una sentencia absolutoria, corresponden al Juez de lo Contencioso Administrativo, establecer en cada caso concreto, si la detención preventiva de que fue objeto el procesado, se impuso con violación de una medida desproporcionada o arbitraria; y corresponde al demandante la carga de indicarle al Juez de lo Contencioso Administrativo, cuáles son los hechos provenientes del Juez Penal, que entrañan una violación ilegal o desproporción y su correspondiente prueba, sin limitarse a trasladar expedientes penales completos para que este Juez, sea el que escudriñe cuál es la prueba que beneficia al demandante, suplantando la labor de su apoderado y desnaturalizando el contenido del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil que autoriza el traslado de "pruebas" pero no el traslado de expedientes.

(...)

11. Consecuentes con lo anterior, en el caso concreto, en el que la libertad fue recobrada en virtud del PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, no puede hablarse de una responsabilidad objetiva del Estado por la privación de la libertad, como se concluiría al aplicar la tesis del H. Consejo de Estado, puesto que en este caso, la libertad se obtiene, no ante la demostración de su inocencia, sino en razón a que, existiendo pruebas que comprometían su responsabilidad en el ilícito, éstas no fueron suficientes para imprimir en el juez, la certeza o plena convicción sobre su autoría. Este aforismo jurídico, impone a la autoridad judicial, la obligación de absolver al imputado, cuando el material probatorio recaudado dentro del proceso, resulta insuficiente para comprobar sin lugar a dubitaciones, la autoría del hecho, pero de ninguna manera, implica que, el Estado, a través de sus agentes judiciales, ha cumplido con las obligaciones constitucionales que en materia de investigación de delitos le han sido conferidas, y no obstante, se advierten dudas sobre la responsabilidad penal del procesado, se debe proceder a su absolución, sin que ello signifique que el proceso penal adelantado contra el detenido, revista ilegalidad o arbitrariedad, y mucho menos, que vaya a considerarse que la medida de aseguramiento de detención preventiva, ha desconocido por eso solo hecho, los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, pues unos son los requisitos de la medida de aseguramiento y otros los dos de la sentencia condenatoria.

Por tanto, no puede exigírsele al funcionario judicial que al momento de analizar la viabilidad de una medida de aseguramiento de detención preventiva, efectúe un juicio de responsabilidad penal frente a la conducta del procesado, a fin de determinar si es culpable del hecho imputado o no, por cuanto ello solo es posible en el marco de una sentencia judicial, una vez recaudado todo el acervo probatorio y culminadas las demás etapas procesales, así como tampoco puede exigírsele que en aras de salvaguardar el derecho a la libertad personal, aguarde hasta la comprobación de la autoría del delito, para ordenar la privación de la libertad, por cuanto ello haría nugatorio el deber del Estado de proteger, como autoridad suprema, la vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades de los particulares así como el deber de mantener la seguridad pública y el orden jurídico, fines primordiales que se persiguen con la figura de la detención preventiva.

(...)

Por el contrario, de las diligencias penales que obran en el proceso, especialmente la providencia mediante la cual se resolvió la situación jurídica del detenido e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, se infiere que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, actuó dentro de los estrictos parámetros establecidos en el Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos, imponiendo una medida de aseguramiento de detención preventiva conforme a los criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad.

Obsérvese que al momento de resolver la situación jurídica del sindicado, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, al encontrar los indicios graves exigidos por el estatuto procesal vigente, para tal efecto.

El juez de contencioso administrativo, no puede arrogarse competencias que deslindan su órbita de juzgamiento, y por tanto, le está vedado rebatir el análisis jurídico que efectuó el Fiscal, sobre los elementos de juicio que tuvo a su alcance para determinar la viabilidad de la medida de aseguramiento..."

En este orden de ideas, fuerza precisar que en el sub judice no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de la Fiscalía General de la Nación

La responsabilidad por parte del Estado que pretende con la presente acción, no reúne los requisitos exigidos para el efecto, ya que, para que pueda darse una condena se requiere que aparezcan demostrados en el expediente la existencia del hecho (falla en el servicio), el daño o perjuicio sufrido por el actor y el nexo de causalidad entre el primero y el segundo.

La Corte Constitucional ha dicho mediante sentencia C 318 de 2008, con respecto a las medidas de aseguramiento que no emanan de una potestad absoluta, puesto que su imposición debe estar sujeta al cumplimiento de estrictas exigencias básicas que le dan legalidad y pasa a mencionarlas:

"(i) deben ser decretadas por intermedio de una autoridad judicial, en el desarrollo de un proceso al cual acceden o accederán; (ii) con carácter eminentemente provisional o temporal; y (iii) bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la Constitución y la ley prevén. Adicionalmente, (iv) deben estar fundamentadas en alguna de las finalidades constitucionalmente admisibles para su imposición. El artículo 250 numeral 1° de la Constitución destaca el criterio de necesidad como guía que debe orientar la imposición de una medida de aseguramiento, parámetro que se encuentra a su vez vinculado a las tres finalidades allí establecidas: (i) asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal; (ii) la conservación de la prueba; y (iii) la protección de la comunidad, en especial de las víctimas."

Como se puede deducir, en el presente caso se aprecia la aplicación de todas y cada una de estas exigencias durante el desarrollo de la actividad investigativa liderada por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y avalada por la Rama Judicial de manera que al aceptarse el actuar de esta entidad como apegada a la normatividad y a Derecho, no puede pensarse en la concreción de perjuicio de algún tipo.

Es así, como en el órgano de control constitucional continúa con su análisis al respecto:

“La detención preventiva, por tratarse de una restricción a la libertad personal, debe estar precedida de los fundamentos jurídicos que conforme al artículo 28 de la Constitución la autorizan de manera excepcional al disponer que : “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado..”, salvo que concurren tres requisitos, a saber: 1) mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las formalidades legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley. Se trata de una medida de naturaleza preventiva o cautelar y por ende provisional, que cumple unas finalidades específicas y que dada su naturaleza preventiva está relacionada con su carácter meramente instrumental o procesal – no punitivo – que impone su ineludible fundamentación, en cada caso concreto, en alguna de las finalidades mediante las cuales se provee a su justificación, a saber: 1. que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, 2. que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, y 3. que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, siendo éstas las únicas finalidades admisibles que pueden llevar a una privación de la libertad como medida cautelar. Si bien la Corte ha declarado la compatibilidad de la detención preventiva con el principio de presunción de inocencia, ha destacado también la necesidad de su justificación en fines y razones que sean constitucionalmente admisibles.”

En el presente caso los fines y razones no solo son constitucionalmente admisibles sino evidentemente necesarias para salvaguardar la imparcialidad y transparencia del proceso penal y su final desenlace.

Entre otras sentencias que en casos similares se han proferido tenemos:

- C.E., Sec. Tercera, Sent. 47.380, abr. 26/2017. M.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
- C.E., Sec. Tercera, Sent. 41.608, jul. 21/2016 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
- C.E., Sec. Tercera, Sent. 42.476, jul. 14/2016. M.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
- C.E., Sec. Tercera, Sent. 42.555, jul. 14/2016. M.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
- C.E., Sec. Tercera, Sent. 41.604, jun. 30/2016. M.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
- C.E. Sec. Tercera, Sent. 38.524, jun. 24/2015. M.P. Hernán Andrade Rincon.
- C.E., Sec. Tercera, Sent. 40.217, abr. 18/2016. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
- C. Const., Sent. C-037, feb. 05/1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO.

La preclusión por la prescripción de la acción en favor de Julio Cesar Arango Echeverri, significa el cumplimiento por parte de cada uno de los funcionarios de la F.G.N., que participó dentro del proceso de sus funciones contempladas en la Ley 906 de 2004. Se hace claridad sobre los roles que cumple la policía judicial, los fiscales y los jueces, así: 1. Se comienza el proceso con el conocimiento de la probable ocurrencia de una conducta delictiva y a la policía judicial le corresponde realizar “actos de indagación o investigación” (artículo 205 de la Ley 906 de 2004). 2. El resultado debe ponerse en conocimiento del fiscal que dirige la investigación,

quien debe adelantar el plan metodológico, en el cual se deben establecer los objetivos de la investigación teniendo en cuenta la naturaleza de la "hipótesis delictiva". 3. Recolectadas las pruebas, se presenta formulación de imputación (artículo 286 de la Ley 906). En esta etapa es que se puede afirmar que inicia la investigación, en la cual, tanto la defensa como el fiscal recopilan pruebas. 4. Luego se presenta la acusación, etapa en la cual la defensa puede conocer las pruebas con las que cuenta la Fiscalía (artículos 339 y ss. de la Ley 906). 5. Se realizan los actos preparatorios del juicio oral con la audiencia de formulación de acusación y la audiencia preparatoria (artículos 356 y ss. de la Ley 906). 6. Juicio Oral. Tal como se reconoce en esta sentencia, en la fase investigativa no puede hablarse propiamente de "pruebas", porque adquieren esta connotación sólo en el debate público. Por lo tanto, el juicio oral se constituye "en el centro de gravedad del proceso penal". Hay que tener claro que el proceso penal contemplado en la Ley 906 de 2004, tiene una filosofía acusatoria diferente al anterior "debido a que la concepción del proceso penal como proceso de partes involucra justamente las nociones de la duda (decisión más allá de toda duda razonable), en calidad de variables que son incontrolables por parte del fiscal si la actividad de la defensa es lo suficientemente profesional como para quitarle piso a una acusación (...). Los conceptos penales nuevos, creados por la Ley 906 de 2004, requieren una adaptación en la teoría de la responsabilidad administrativa debido a que el proceso penal está más librado a las partes que al propio Estado en la demostración de la responsabilidad penal".

Por lo tanto, no puede pretenderse que el fiscal desde el comienzo del proceso pueda definir a ciencia cierta sobre la responsabilidad o no del investigado, porque existe un debate probatorio para tratar de establecer la verdad de los hechos y es al juez a quien le corresponde integrar todo el material probatorio y decidir según los principios de hermenéutica jurídica en materia penal, pues tanto es así que hasta en el juicio oral puede solicitar la absolución del investigado, sin llegar a incurrir en falla alguna, toda vez que como se ha venido mencionado todos los procedimientos se hacen bajo la dirección, orientación y visto bueno del juez de garantías o de conocimiento según sea la etapa del proceso.

Así las cosas, la investigación adelantada en contra del demandante, está en la Constitución, y debe afirmarse que se encontraba en el deber jurídico de tolerar o sobrellevar el daño que la captura y demás trámite procesal efectuado por la FGN le generó, carga que no sobrepasa o sobrepasa el equilibrio frente a las cargas públicas, pues esta debe ser soportada, por disposición superior, por la totalidad de los ciudadanos, siempre que pueda desprenderse justamente que coexistían o concurrían, razones o causas fundados para la FGN, que dieran lugar a la convicción de la ilicitud y por ende a la comisión de un delito tal como lo ha señalado el Órgano de Cierre de la Jurisdicción Contenciosa.

HECHO EXCLUYENTE DE UN TERCERO

Se observa que a todas luces se configura esta causal que exonera de responsabilidad al estado, puesto que, efectivamente la investigación penal tuvo su origen en los informes de policía judicial, el allanamiento y testimonios que indicaban que el señor Julio Cesar Arango Echeverri, era uno de los partícipes en el homicidio de Grajales Rojas. Por lo tanto, de dicha conducta delictiva fue señalado el señor Julio Cesar Arango Echeverri, por parte de los señores Antonio Villabon y Javier Antonio Arango Coronado. Lo que dio a que inicialmente se encaminara con la hipótesis de la responsabilidad, en contra del aquí demandante.

PRUEBAS

1. OFICIAR

- 1.1. Solicito respetuosamente a su Despacho, se oficie a la Rama Judicial-oficina de apoyo judicial con el fin de que envíen la totalidad del proceso penal Nro. 76-020-6000-162-2006-00006-00; inclusive los videos o grabaciones de las audiencias.

Objeto de la prueba: Desvirtuar los hechos y los supuestos perjuicios materiales e inmateriales del aquí demandante.

2. INTERROGATORIO DE PARTE:

- 2.1. De igual forma, solicito Señor Juez, que fije fecha y hora para que se practique el interrogatorio de parte que formularé personalmente o mediante sobre cerrado al aquí demandante Julio Cesar Arango Echeverri.

Objeto de la prueba: probar las excepciones planteadas, al ser interrogado sobre los hechos de la demanda y las pruebas recaudadas dentro del presente asunto.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO LÓPEZ GUTIERREZ

C. C. No. 80.724.257 de Bogotá

T. P. No. 162.113 del C. S. de la J.